

La provincia pierde 3.800 empleos agrícolas en un año por el abandono familiar

La Conselleria alerta de que el campo reduce ocupados en la región por la mala evolución del sector en Alicante

B. S.

Ni las bondadosas lluvias del comienzo del otoño que ha registrado Alicante parece que vayan a impedir que siga la creciente despoblación laboral del campo. En el último año contabilizado por la Conselleria de Agricultura, Alicante, que se halla a la cabeza en pérdida de empleo en la Comunidad, redujo el número de trabajadores ocupados en tareas agrícolas en 3.800. Castellón suma casi 2.000 nuevos ocupados agrícolas y Valencia 1.000.

Según la Generalitat, el fenómeno de la despoblación laboral del sector agrícola está íntimamente ligada al abandono de explotaciones familiares. En el último Informe del Sector Agrario, los técnicos de la Conselleria dan cuenta de que la población ocupada total de la Comunidad Valenciana creció en el año 2005 en 101.400 personas, mientras que la ocupada agrícola disminuyó en 700. Es notable la reducción de empleo en la provincia de Alicante, con esos 3.800 personas que se fugan a otros sectores de actividad.



La Conselleria se muestra convencida de que esa fuga se produce porque se envejece el campo de manera progresiva e imparable en las dos últimas décadas. Esta evolución ha resuelto a las familias de campesinos a reestructura el empleo en sus propias explotaciones. Este cambio ha originado una disminución de la participación del trabajo familiar en favor de un aumento del trabajo asalariado, tanto fijo como eventual.

En efecto, las propias estadísticas de la Administración autonómica revelan que la población asalariada agrícola media de la Comunidad Valenciana pasa de 39.480 personas en diciembre del año 2004 a 40.800 a finales del año 2005. Es decir, crece el número de asalariados en 4.000 personas, que trabajan con contrato fijo o eventual en el campo. Un tercio, es decir, 1.200 de esos nuevos asalariados, son los que tratan de paliar la caída en picado de la población ocupada agraria vinculada a empresas y explotaciones familiares, según la Conselleria.

Desmoronamiento

El departamento que dirige la nueva consellera Maritina Hernández asegura que si el empleo evoluciona mal en el conjunto de la Comunidad Valenciana es porque en la provincia de Alicante va peor. Los últimos datos de la EPA reflejan, según el mismo informe oficial, que la población activa agrícola (ocupados más parados) se desmorona en Alicante. Esta provincia pierde en un solo año un 23% de activos, mientras que Valencia sólo un 2,3% y Castellón suma un 8%.

A la hora de analizar el mal momento que atraviesa el sector agrícola alicantino (salvo raras excepciones de concentración de parcelas y de mecanización de cultivo y de manipulación, caso del subsector tomatero y otras hortalizas de invernadero) son numerosos los factores, además del citado de progresivo abandono familiar de la explotación.

El responsable provincial de Unió de Llauradors-Coag, Juan Pastor, repite por activa y por pasiva que el problema no es coyuntural, sino totalmente estructural. Y subraya que mientras siga el actual proceso de presión urbanística por parte de promotores y constructores y el hundimiento del precio en origen de los principales productos agroalimentarios el campo alicantino no tiene nada que ver, porque no genera rentas.

Esta organización agrícola, Unió de Llauradors-Coag, se ha significado en los últimos años por realizar campañas, incluso a pie de calle y en mercadillos, para concienciar a las amas de casa de que el precio que pagan por la fruta y verdura está muy lejos del que le corresponde percibir al origen de la cadena comercial, o sea al agricultor. Además, esta organización desarrolló el verano del pasado año una campaña específica, el Camps és vida, fes-lo teu, debido a que el campo alicantino y de la Comunidad «sufre una crisis brutal», según el secretario Joan Brusca. Por ello decidieron pedir más sensibilización tanto por parte ciudadana como de las tres administraciones, con suerte muy desigual, un año después, según explican fuentes de la dirección regional de Unió de Llauradors-Coag.

Los datos de Coag se mantienen, doce meses después, inalterables y reflejan la crisis generalizada del agro provincial.

En sólo cuatro años, 3.000 jóvenes agricultores profesionales han abandonado su tarea por falta de viabilidad y de rentabilidad, fundamentalmente por la crisis de precios en origen y el descontrol en la actuación de intermediarios dentro de la cadena de distribución; en el período de quince años, la provincia ha perdido 59.689 hectáreas de cultivos agrícolas, muchas de ellas convertidas ahora en parcelas con chalés y piscina incluida; en el intervalo entre 1999 y 2003, se han extinguido un tercio (16.860) de los titulares de explotaciones agrícolas de la provincia, o sea agricultores que cotizaban en el régimen especial agrario de la Seguridad Social.

Sólo quedan 24.661, de los que la mitad reside y trabaja en la Vega Baja, la única que aún tira del motor agrícola provincial, pese al permanente estado de polémica a cuenta de la cantidad y calidad del agua del río Segura.
